



GETTY IMAGES

Informe de la Misión Internacional
de Naciones Unidas

En Venezuela ocurren crímenes internacionales

Carlos Lusverti*

Un brevísimo resumen del informe de la Misión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sus hallazgos más importantes y reflexiones sobre el camino aún por recorrer en la búsqueda de justicia y reparación tanto para las víctimas como para la sociedad venezolana

El 16 de septiembre de 2020 fue publicado el informe¹ de la Misión de Expertos Internacionales Independientes (la Misión) convocada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH-ONU) a finales de 2019 para investigar:

[...] ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, a fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas.²

Este informe no debe confundirse con otros informes de derechos humanos, como el de la alta comisionada de la ONU para derechos humanos, Michelle Bachelet, o el de la Comisión Interamericana, pues estos identifican violaciones a derechos humanos y señalan la responsabilidad del Estado. En este informe se concluye inequívocamente lo que desde hace años la sociedad civil viene denunciando: en Venezuela ocurren graves violaciones de derechos humanos. Se trata de violaciones de tal gravedad que son crímenes internacionales, por lo que se identifica personas e instituciones responsables. El grado de responsabilidad y sanción corresponderá determinarlo a un tribunal penal nacional o internacional.

LOS HALLAZGOS

Una política de *represión política selectiva* que incluye detención arbitraria de personas por motivos políticos, donde las víctimas fueron frecuentemente objeto de desaparición forzada momentánea, torturas y otros tratos crueles inhumanos o degradantes. En este aspecto la Misión identificó como entes responsables al Sebin y al DGCIM.

El informe identifica *ejecuciones extrajudiciales como política de seguridad ciudadana* que se

produjeron en el contexto de operaciones “[...] policiales y/o militares destinadas a combatir la delincuencia, que resultaron en un elevado número de ejecuciones extrajudiciales contra personas consideradas como delincuentes [...]” en 140 casos de Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) luego llamadas “humanistas”.

La Misión encontró “[...] motivos razonables para creer que las fuerzas de seguridad cometieron ejecuciones extrajudiciales, así como arrestos y detenciones arbitrarias durante las OLP”. Esto incluyó falsificación de pruebas y simulación de enfrentamientos sembrando armas o contrabando, simulando tiroteos y disparos al aire para simular intentos de escape.

Finalmente, pero no menos importante, *violaciones en el contexto de las protestas*, que incluían detenciones arbitrarias de manifestantes mantenidos en régimen de incomunicación antes de ser llevados ante un juez. En algunos casos las acusaciones basadas en evidencia fabricada y sometidos a procesos judiciales sin independencia sea porque civiles fueron sometidos a la jurisdicción militar, o por la injerencia del Ejecutivo en los procesos judiciales.

LAS CONCLUSIONES

La Misión concluye que las violaciones documentadas:

[...] se produjeron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del Estado de derecho en Venezuela desde 2014. El debilitamiento de los mecanismos de rendición de cuentas democráticos, judiciales e institucionales dio lugar a una creciente impunidad, lo que exacerbó las violaciones.³

El informe se realizó pese a que el Gobierno de Nicolás Maduro negó el ingreso o cualquier información a la Misión, por lo que esta realizó su investigación entrevistando víctimas y testigos a distancia, analizando 223 casos, expedientes, testimonios y 2 mil 891 incidentes, determinando tanto patrones como responsabilidad de instituciones e individuos.

Los eventos fueron documentados bajo el criterio de información que satisface a un observador objetivo y prudente de que “[...] el incidente se ha producido tal como se ha descrito con un grado razonable de certidumbre” que permite identificar: (a) que se produjo la violación o delito, y (b) que la persona o institución identificada fue responsable. En consecuencia, *la Misión concluye que los hechos describen crímenes de lesa humanidad cometidos por acción u omisión de altos jerarcas del Poder Ejecutivo y las cadenas de mando de instituciones de seguridad* (policial y militar) que ordenaron o, habiendo tenido la

posibilidad o responsabilidad, no impidieron que se perpetraran.

La Misión recomienda una investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables por el Ministerio Público y los tribunales nacionales, siendo los primeros llamados a combatir la impunidad de estos graves hechos pero, si esto no ocurriera, considerando la gravedad de los mismos (crímenes internacionales), otros Estados o la Corte Penal internacional podrían iniciar estos procesos penales.

TENEMOS INFORME ¿Y AHORA QUÉ?

El informe es un logro para las víctimas, cuyas voces finalmente fueron escuchadas con imparcialidad e independencia, así como para el trabajo de documentación de organizaciones y defensores de derechos humanos que, a pesar de los riesgos de criminalización y persecución durante años, han dejado registro de las gravísimas violaciones a derechos humanos.

Aun cuando el informe es contundente, no debe olvidarse que detrás de cada patrón y caso documentado hay personas cuyo proyecto de vida fue destruido por pensar de un modo crítico, vivir en pobreza o reclamar sus derechos, arrebatados por acciones u omisiones de las autoridades.

Para las víctimas aún hay camino por recorrer. Como el propio informe indica, la responsabilidad primaria de poner fin a la impunidad recae en las instituciones venezolanas; dada la magnitud de estos crímenes internacionales y su carácter imprescriptible, si la impunidad persiste cualquier país podría perseguirlos, así como también la Corte Penal Internacional. Se trata de un camino largo y complejo.

Dada la ausencia de instituciones imparciales en Venezuela y la negativa de las autoridades a rendir cuentas, la sociedad civil ha solicitado al Consejo de Derechos Humanos que la Misión siga trabajando y profundizando en sus hallazgos, tema que espera decisión del Consejo al momento de escribir este resumen. Por ahora, el informe es un documento histórico que implica pesados señalamientos contra altos funcionarios del Gobierno, que quedarán en la historia.

NOTAS:

- 1 Salvo que se indique lo contrario, las citas corresponden al Informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela A/HRC/45/33 15 de septiembre de 2020. Disponible en <https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/FFMV/Pages/Index.aspx>
- 2 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Resolución 42/25 del 27 de septiembre de 2019.
- 3 Informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (*ob. cit.*).

*Abogado. Miembro del Consejo de Redacción de la revista SIC.